

REFERENCIAS

Cárdenas, Mauricio (2002). "Economic Growth in Colombia: A Reversal of 'Fortune'?", *Archivos de Economía*, No. 178, DNP, Colombia, Marzo.

Coronell, Daniel (2006). "El Mapa del Fracaso", *Revista Semana*, p. 14, septiembre 4.

Barro, Robert (2000), "To Beat Colombia's Guerrillas, Legalize Drugs in the U.S.", *Business Week*, marzo 13, p. 26.

Friedman, Milton (1972), "Prohibition and Drugs", *Newsweek*, mayo 1, p. 104.

_____ (1991), "The War We Are Losing", en *Searching for Alternatives: Drug-Control Policy in the United States*, Melvyn P. Krauss y Edward P. Lazear, eds. Stanford: Hoover Institution Press, pp. 53-67.

Miron, Jeffrey (1991), "Drug Legalization and the Consumption of Drugs: An Economist's Perspective", en *Searching for Alternatives: Drug-Control Policy in the United States*, Melvyn P. Krauss y Edward P. Lazear, eds. Stanford: Hoover Institution Press, pp. 68-76.

_____ (1998), "The Case for Drug Legalization", Department of Economics, Boston University, Junio.

_____ (2001), "The Effect of Drug Prohibition on Drug Prices: Theory and Evidence", Department of Economics, Boston University y Bastiat Institute, Agosto.

_____ y Jeffrey Zweibel (1995), "The Economic Case Against Drug Prohibition", *Journal of Economic Perspectives*, 9 (4), pp. 237-341.

Morgan, John P., (1991), "Prohibition is Perverse Policy: What was True in 1933 is True Now", en *Searching for Alternatives: Drug-Control Policy in the United States*, Melvyn P. Krauss y Edward P. Lazear, eds. Stanford: Hoover Institution Press, pp. 405-423.

Naciones Unidas (2004), *Colombia Coca Cultivation Survey*, Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas - UNODCI, junio.

Ortiz, Carlos H. (2002). "Luchando Infructuosamente contra la Hidra: Un Modelo Sencillo del Narcotráfico", *Cuadernos de Economía*, No. 37, Noviembre, Departamento de Economía, Universidad Nacional, Bogotá.

_____ (2003). "La Guerra contra las Drogas es Contraproducente: Un Análisis Económico de Equilibrio General", *Revista Lecturas de Economía*, No. 58, junio, Universidad de Antioquia, Medellín, pp. 47-68.

Rocha, Ricardo (2001). "Antecedentes y Perspectivas del Narcotráfico en Colombia: Una Mirada a las Políticas", *Problemas del Desarrollo*, vol. 32, No. 126, México, julio- septiembre.

Cali, Mayo 2007
No 01

EDITOR:
Comité de Investigaciones de la
Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas
de la Universidad del Valle

Esta es una publicación
del Centro de Investigaciones y
Documentación
Socioeconómica
CIDSE
de la Facultad de Ciencias
Sociales y Económicas
de la Universidad del Valle

Las publicaciones
se pueden consultar en el
Web Site de la Universidad
del Valle

www.univalle.edu.co
(facultades) Link: Facultad de
Ciencias Sociales y
Económicas

Participa en este número:

El grupo de investigación
sobre Crecimiento y
Desarrollo Económico



PRESENTACIÓN

EL OBSERVADOR REGIONAL

El Observador Regional es un medio de expresión de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle y del Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica (CIDSE). Se concentrará en el análisis de la coyuntura económica, social y política de la región y en el estudio de problemas como el conflicto regional, el crecimiento económico, la acción colectiva, las dinámicas del empleo y los mercados regionales, los problemas ambientales, las transformaciones demográficas, las elecciones locales y departamentales, entre otros muchos aspectos de la dinámica económica y social regional. Dicho análisis se apoyará en los resultados de los estudios que llevan a cabo los ocho grupos de investigación adscritos al CIDSE: Conflicto, Aprendizaje y Teoría de Juegos; Economía Laboral y Sociología del Trabajo; Migración, Urbanización e Identidades de las Poblaciones Afrocolombianas; Sociedad, Historia y Cultura; Crecimiento y Desarrollo Económico; Economía Regional y Ambiental; Acción Colectiva y Cambio Social y Familia, Parentesco y Reproducción Social. También se presentará la reflexión de los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas no adscritos a los grupos de investigación e invitaremos a docentes e investigadores de otras facultades y universidades para que se expresen sobre los problemas mencionados.

Como es suficientemente conocido, uno de los principales problemas de las revistas, periódicos y medios de expresión de diverso orden es su continuidad. En Colombia son innumerables las revistas que expiran con su primer número, por carencia de recursos, por falta de colaboradores y sobre todo por las dificultades inherentes a mantener un medio de comunicación escrito con cierta calidad académica. Conocedores de estas dificultades, aspiramos a que *El Observador Regional* tenga una periodicidad trimestral y que el Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas funcione como Comité Editorial. Con este primer número, que reflexiona sobre la parapolítica, escrito por Carlos Humberto Ortiz, coordinador del grupo sobre Crecimiento y Desarrollo Económico, ve la luz este nuevo órgano de expresión del pensamiento de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Con él se materializa un viejo anhelo, porque desde hace algún tiempo, un buen número de profesores de los departamentos de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad del Valle ha deseado tener un medio de expresión de este tipo.

Luis Carlos Castillo
Director del Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica,
CIDSE
Universidad del Valle

LA CRISIS PERPETUA

La infiltración paramilitar de una parte del Congreso y de una parte del gobierno nacional, que involucra a miembros de las fuerzas armadas y a funcionarios de alto nivel de los organismos de control del Estado, ha puesto de presente la crisis de todo orden que vive Colombia.

Para nadie es un secreto que detrás de esta corruptela se mueve el narcotráfico. Y que este episodio es otro más de los innumerables casos de corrupción y desinstitucionalización nacional. Pero en este caso, el grado de captura del Estado por los narco-paramilitares ha quedado expuesto de manera descarnada. Hay conmoción y desconcierto. Los medios han expresado rechazo e indignación, pero los esquemas explicativos son escasos.

Este breve ensayo insiste en una hipótesis que contribuye a ordenar el rompecabezas de la crisis política colombiana: el narcotráfico se expande porque se lo combate, y con él aumentan la corrupción y la violencia. Si esta explicación es correcta, se deduce como corolario que en la raíz de nuestra crisis se encuentra la inflexible política de represión del narcotráfico que dictaron las potencias internacionales hace ya más de tres décadas.

No cabe en el sentido común que algo se reproduzca porque es atacado. En la visión ingenua, un mercado atacado debe desaparecer. Sería lo que pasaría si el gobierno reprimiera la producción y el consumo de un bien común, como por ejemplo la papa; en tal caso muy probablemente se dejaría de sembrar papa en poco tiempo, y la gente sustituiría este alimento por otro. Pero el sentido común usualmente generaliza incorrectamente. El narcotráfico no es una actividad económica como cualquier otra; tiene características especiales que lo blindan ante ataques externos. La aparente paradoja de que un mercado se blinde y se consolide bajo ataque se puede explicar científicamente, si existe la voluntad de entender.

Conviene empezar por definir qué es la represión del narcotráfico. En primer lugar, está la represión de la oferta de drogas ilegales. Ésta se lleva a cabo con la fumigación y erradicación de cultivos prohibidos, la interdicción de cargamentos, y la criminalización del narcotráfico. Esta política se complementa por el

lado de la demanda con la prohibición y la criminalización del consumo de drogas ilegales. Es evidente, sin embargo, que el énfasis se pone en la lucha contra la oferta. De hecho, en algunos países europeos el consumo es aceptado, y se trata incluso como un problema de salud pública. Pero, en general, las potencias internacionales rechazan y combaten la producción, la distribución y la comercialización de las drogas sicoactivas.

La política de represión de la oferta responde a intereses que se examinarán después. Estos casi siempre son ignorados pues se camuflan en la propaganda de cruzada moral que reza de la siguiente forma: los malvados productores y distribuidores de drogas sicoactivas del Sur corrompen a nuestra ingenua juventud (del Norte); por tanto, se debe destruir la oferta de drogas y combatir las fuerzas que la apoyan. En consecuencia, la lucha contra el narcotráfico se ha establecido en los Estados Unidos como una política de Estado. Más aún, los Estados Unidos han establecido mecanismos coercitivos para que los débiles gobiernos de los países productores reproduzcan fielmente sus políticas. Entre tales mecanismos se encuentran la certificación de buena conducta por persecución del narcotráfico y el manejo discrecional de concesión de visas (el garrote), pero también los mecanismos de premios -como "Aptdeas" y otras prebendas comerciales- que reciben los gobiernos colaboradores (la zanahoria). A decir verdad, las medidas coercitivas se han encontrado con la obsecuencia de gobiernos débiles, los cuales se encuentran dispuestos a congraciarse con el poder mundial para resarcir "pecados" y ganar unas cuantas ventajas comerciales.

La inutilidad de la represión de los bienes que generan dependencia es un fenómeno conocido y explicado por la teoría económica. Prestigiosos economistas como Milton Friedman (1972, 1991), Robert Barro (2000), Jeffrey Miron (1991, 1998, 2001), Miron y Zweibel (1995), y John Morgan (1991), entre muchos otros, han puesto de presente lo inútil de una lucha contra las drogas ilegales. Se tiene a mano además la referencia histórica de la lucha contra el alcohol en los Estados Unidos durante los años treinta del siglo pasado (Morgan). El gobierno de Estados Unidos libró y perdió esta batalla, y de paso la política represiva y prohibicionista produjo mafias poderosas y asesinas

deducir dónde están estos productores y estos banqueros. También se ha mencionado que un *status quo* de persecución perenne del narcotráfico coloca a los países del tercer mundo en condición de desventaja ante las potencias internacionales. Finalmente, el desinterés por la suerte de los más pobres en los países desarrollados, y por la suerte de los países pobres, que pagan la cuota más alta por la violencia que desata el narcotráfico, también explica la continuidad de una política socialmente indeseable. En forma dramática, alguien dijo que en su lucha contra el narcotráfico el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a derramar hasta la última gota de sangre... colombiana.

Este análisis es pesimista pues el gobierno de Colombia es incapaz de modificar la causa del problema: la política de lucha contra el narcotráfico se le impone desde arriba. En ese sentido, Colombia está sobredeterminada. Hoy en día Colombia se mueve como un barco de papel en un vórtice mortal: hacia el fondo. No obstante, un gobierno ilustrado, con mayor interés en el bienestar social, podría jugar un papel más activo en la arena internacional para cambiar la obsoleta política de lucha contra el narcotráfico. De entrada, podría cambiar las prioridades y darle mayor importancia al alivio de la pobreza y al desarrollo nacional que al combate del narcotráfico. Ello implicaría obviamente asumir el riesgo de sanciones internacionales.

La solución del problema del narcotráfico es claramente internacional. Ésta debe combinar sabiamente descriminalización de la actividad y regulación estatal. La simple legalización no resuelve el problema; la teoría económica ha mostrado fehacientemente que un mercado como el de las drogas ilegales, que genera externalidades negativas ostensibles, debe ser regulado. El consumo que deviene en adicción debe ser tratado como un problema de salud pública. Una posibilidad sería legalizar la actividad controlándola con impuestos al consumo, al tiempo que se trata a los adictos en centros oficiales de salud. Los gobiernos del mundo podrían negociar con los países productores el suministro controlado y certificado de la droga que requirieran sus centros de salud.

Unas cuantas reflexiones finales sobre la verdad y su construcción. La "verdad" impuesta por el Norte, especialmente por los Estados Unidos, se ha

encontrado con la "voluntad de verdad" local. Se ha generado así un ambiente de intolerancia hacia cualquier cuestionamiento de las políticas antidrogas de los Estados Unidos.

La incapacidad de pensar por nuestra cuenta también contribuye a nuestra desgracia nacional. Nuestros intelectuales, especialmente los vinculados al poder y los que hacen cola para ocupar los puestos burocráticos internacionales, son neoliberales cuando se trata del comercio exterior colombiano y del mercado de capitales (¡Viva el Consenso de Washington!), pero son intervencionistas si se trata del mercado de las drogas sicoactivas y de las migraciones económicas internacionales (¿Quién, que quiera catapultarse a un puesto burocrático internacional, se atreve a cuestionar la fallida política antidrogas?, ¿Quién cuestiona las visas y las enormes barreras al desplazamiento del trabajo del Sur al Norte?). Los verdaderos neoliberales, como Friedman y Barro, sí abogan consecuentemente por la liberalización del mercado de las drogas. Así, pues, el común denominador de nuestros funcionarios y de nuestros prospectos de burócratas internacionales, es su inclinación ante las políticas impuestas por los Estados Unidos. La crisis así será perpetua.

Carlos Humberto Ortiz
Universidad del Valle

agregada. Por ello el peso se sigue revaluando y se favorecen las actividades no transables, especialmente la construcción. Una situación muy similar a la que se vivió en el primer lustro de la década de los noventa.

Una predicción del modelo de crecimiento que se presenta en Ortiz (2003) es que la mayor represión del narcotráfico disminuye la tasa de crecimiento en el corto y en el largo plazo. Una verificación empírica de este comportamiento se presenta en Cárdenas (2002), quien muestra que la proliferación de las actividades narcotraficantes desde 1980 ha aumentado la violencia y ha disminuido el crecimiento económico de largo plazo en Colombia. Pero no es sólo la violencia la que incide en una menor inversión y en un menor crecimiento económico. También está la limitación al crecimiento que impone la restricción fiscal del Estado (Ortiz, 2003). La lucha contra el narcotráfico aumenta la rentabilidad del mismo y lo expande. Por tanto, tarde o temprano se requieren más recursos para sostener la lucha. Especialmente si se considera que la creciente corrupción disminuye la eficiencia del Estado y “distrae” recursos. A pesar de todo el apoyo que ha recibido el gobierno colombiano de Estado Unidos, con el Plan Colombia y el Plan Patriota, el gasto militar y la corrupción (el orden puede ser diferente) no dejan de presionar al presupuesto nacional. En primer lugar, el gobierno ha tallado fiscalmente a la clase media, que paga hoy más impuestos sobre la renta. Pero también ha presionado a los ricos con los impuestos sobre el patrimonio y los impuestos de guerra. Todos pagamos hoy más IVA y el impuestos sobre las transacciones financieras no sólo aumenta sino que se perpetúa - empezó en 2% y ya va en 4%. Así, el creciente margen de tributación incidirá tarde o temprano en la rentabilidad esperada y en la inversión productiva, con efectos negativos en el crecimiento económico.

Una parte del gobierno colombiano y parte de la opinión ilustrada manifiestan su desconsuelo ante una lucha que no rinde frutos, que nunca termina y que sólo se intensifica. Por ello, y procurando no entrar en conflicto con la directriz internacional, el gobierno se acordó recientemente de que la demanda también es culpable del narcotráfico.

Lanzó entonces su campaña publicitaria europea de las “narizotas aspiradoras”, pretendiendo de esa forma persuadir a los consumidores europeos de que abandonen sus hábitos. Pero la causa del problema no está allí, ni mucho menos su solución, pues modificar los hábitos de los europeos con súplicas que reclaman simpatía con el dolor de un país perdido, allá en el Sur, es una ilusión vana, especialmente cuando el hábito ha dejado de serlo y se ha convertido en vicio.

Colombia vive una noche oscura. Cuando amanezca y esta tragedia quede en el pasado, se recordará la actual política de represión del narcotráfico como un paradigma del desastre que puede generar una política incorrecta. Una política incorrecta es perjudicial porque desperdicia recursos, pero también porque desvía la atención de las verdaderas causas de los problemas. Además, usualmente las políticas incorrectas tienen efectos colaterales perjudiciales o desastrosos. Pero la peor de las políticas incorrectas es la que reproduce el problema que pretende eliminar. Y ese es precisamente el caso de la política internacional de lucha contra la oferta de drogas ilegales.

Si la política de represión del narcotráfico es continuamente denunciada como fallida en todas partes, si la prensa internacional y hasta la gran prensa colombiana acepta la tesis anterior, ¿Cuál es la motivación que tienen las potencias internacionales para persistir en el error? La mejor respuesta se encuentra quizás en una combinación de razones: moralismo religioso, conveniencia pecuniaria y desdén por los ciudadanos marginales y los países marginales. El moralismo no es fácil de captar, pero se puede plantear que la alteración de la mente que producen las drogas ilegales y el placer que generan son rechazados por pecaminosos en el sentido religioso. El recurso a las drogas sicoactivas como forma de escape del control social también es rechazado: más que el deterioro físico y mental de las personas -que también se da con el alcoholismo- lo que se rechaza es la propensión a la criminalidad, la rebeldía ante la autoridad y demás actitudes antisociales de los drogadictos. La conveniencia es todavía más clara: productores de precursores químicos y productores de armas amasan pingües beneficios; igual sucede y posiblemente en mayor medida con los banqueros que manejan los excedentes financieros del negocio. No es difícil

que sólo pudieron ser eliminadas cuando se legalizó y reguló la producción de alcohol, y se gravó y reglamentó el consumo.

Así mismo ha ocurrido en Colombia, y en México, y en Brasil, y dondequiera que se haya practicado la política de represión de las drogas ilegales: mafias poderosas tienden a consolidarse y a reproducirse, desinstitucionalizando y corrompiendo la estructura social y política. El año pasado pudimos observar el asombroso poder de rebelión y levantamiento que mostraron los mafiosos narcotraficantes de Sao Paulo cuando las autoridades pretendieron ponerlos en cintura. El proceso 8.000 reveló la influencia de los narcotraficantes en la política colombiana. Y la actual imbricación de los narco-paramilitares con los políticos y funcionarios del gobierno de Colombia, ilustra el poder de estas mafias para capturar el Estado.

La causa de este fenómeno mafioso se encuentra en el efecto contraproducente de una política equivocada. La represión de la oferta de un producto de difícil sustitución que es, además, percibido por los consumidores como indispensable, aumenta la rentabilidad esperada del negocio y, por esa vía, lo reproduce (Ortiz, 2002, 2003). El alcohol es un ejemplo del tipo de bien mencionado: baja sustituibilidad y alta necesidad. La cocaína y la heroína también satisfacen las condiciones mencionadas: no aparecen todavía productos sintéticos capaces de sustituirlas, y su consumo genera hábito y dependencia. Por ello, la política de represión de la oferta termina convirtiendo al narcotráfico en un monstruo que se reproduce y se fortalece en la medida en que se lo combate. La analogía del narcotráfico con la mítica Hidra, aquel monstruo cuyas cabezas se reproducían cuando eran cercenadas, es ilustrativa.

La lógica del asunto es sencilla. Cuando una empresa narcotraficante pierde su producto -por interdicción o por destrucción de la empresa- la pérdida individual de esta firma es enorme, pero la rentabilidad esperada de las demás aumenta e induce un crecimiento de la actividad más que proporcional a la destrucción original (Ortiz, Op. cit.). Por ello, la lucha contra el narcotráfico tiene una lógica acumulativa viciosa. La represión expande el negocio, si el gobierno desea mantener

su tasa de éxito -o es obligado a ello- debe comprometer más recursos, lo cual induce más capturas, lo que, a su vez, induce una mayor expansión de la actividad.

La lógica acumulativa es compleja pues los narcotraficantes no son sujetos pasivos de la persecución contra ellos, sino que procuran defenderse. Una forma obvia es buscar que la acción estatal recaiga sobre los demás narcos. La delación mutua es un mecanismo que explica, entre otras cosas, la guerra que sostuvieron durante mucho tiempo los carteles de Cali y Medellín. Explica la reciente guerra entre los narcos del Norte del Valle. También explica la creación de una red de delatores pagados por el Estado, y la aún más reciente propuesta de pagarles a los lugartenientes de los capos por sus delaciones. Pero nada de eso es tan importante como la infiltración de los organismos de control del Gobierno y del Congreso para buscar la protección de la actividad propia -la prensa colombiana narra cómo los funcionarios cooptados pasaban información a los narcotraficantes, incluso de la misma DEA-. También está en la memoria el episodio más temprano de la presión que los narcotraficantes ejercieron sobre el Congreso para evitar la extradición. Por consiguiente, la infiltración del Estado disminuye su eficiencia e implica el uso de todavía más recursos para continuar la lucha contra las drogas.

La necesidad de que organizaciones de tipo mafioso comanden el negocio del narcotráfico se explica por la ilegalidad de la actividad. El combate estatal contra el narcotráfico hace que sólo empresarios dispuestos a colocarse por fuera de la ley, u organismos armados por fuera de la ley, tengan la capacidad de manejar el “negocio”. Estas organizaciones se conforman alrededor de liderazgos que requieren absoluta lealtad de sus subordinados para garantizar el funcionamiento. Se generan así mafias que tienden a controlar la actividad y a protegerla a sangre y fuego. Varias razones se conjugan para explicar esta característica: los cultivos requieren un espacio clandestino, la provisión de la droga requiere el establecimiento de lazos estrechos con los productores, los laboratorios de procesamiento también son clandestinos, las

rutas y canales de comercialización son excluyentes, y los contactos externos también deben ser cuidados. Sólo con lealtades fuertemente constituidas (zanahoria) y con coerción y violencia (garrote) es posible manejar a una organización de este tipo.

La violencia es una consecuencia de la enorme rentabilidad que genera el narcotráfico -no es cierto que los colombianos seamos intrínsecamente violentos-. De hecho, la rentabilidad esperada del capital de riesgo se ha asociado históricamente con la criminalidad y la violencia. No conozco una cita que exprese mejor esta relación que la siguiente:

“El capital [...] huye de los tumultos y las riñas y es tímido por naturaleza. Esto es verdad, pero no [es] toda la verdad. El capital tiene horror a la ausencia de ganancia o a la ganancia demasiado pequeña, como la naturaleza tiene horror al vacío. Conforme aumenta la ganancia el capital se envalentona. Asegúresele un 10 por 100 y acudirá a donde sea; un 20 por 100, y se sentirá ya animado; con un 50 por 100, positivamente temerario; al 100 por 100, es capaz de saltar por encima de todas las leyes humanas; el 300 por 100, y no hay crimen a que no se arriesgue, aunque arrostre el patíbulo. Si el tumulto y las riñas suponen ganancia, allí estará el capital encizañándolas. Prueba: el contrabando y la trata de esclavos” (Dunning, citado por Marx, 1867).

Por eso, una política que equivocadamente cree combatir el narcotráfico termina siendo el mejor aliciente de la actividad y es una causa fundamental de la violencia y la corrupción que socavan las bases del desarrollo del país.

Colombia lleva más de treinta años persiguiendo a las mafias de la droga sin que haya la más mínima señal de que el negocio se debilite. Por el contrario, más bien se fortalece. Diversas fuentes han señalado que hacia 1980 Colombia sembraba muy pocas hectáreas de coca. En 1990 se sembraban 40.000 Has, como contraparte de la disminución de las áreas sembradas en Perú y en Bolivia. Para 2000 se sembraban entre 125.000 Has. (Rocha, 2001) y 163.000 Has. (Naciones Unidas, 2004). Actualmente, el gobierno colombiano celebra que ha reducido la producción a 100.000 Has. Incluso si fuera cierto, y sin considerar los aumentos de

productividad en la producción de coca y de cocaína, el incremento en sentido histórico es abrumador. Por ello se ha calculado que Colombia puede estar produciendo entre el 60 y el 80% de la oferta mundial de cocaína.

Para explicar este fenómeno es necesario postular que el país tiene ventajas comparativas y absolutas que hacen que el negocio se reproduzca aquí. En otras palabras, si bien la represión del narcotráfico puede inducir un desplazamiento del negocio a otros países (por ejemplo, México y Brasil), también se desplaza a regiones colombianas donde inicialmente no se sembraban los cultivos ilícitos. En general, se ha comprobado que el país tiene una gran capacidad de retener la actividad narcotraficante en sus fronteras. El llamado “efecto globo” -una presión en un punto se transmite inmediatamente a los demás- actúa tanto a nivel nacional como internacional, pero una gran parte es nacional, implicando así la existencia de grandes ventajas nacionales en la actividad. De hecho, se ha comprobado recientemente que la concentración de la fumigación de los cultivos de coca en los sectores controlados por la guerrilla ha inducido su migración a regiones del resto del país controladas por paramilitares (Coronell, 2006).

Con respecto a las ventajas comparativas del país, algunos autores han hecho énfasis en las ventajas de la localización geográfica -punto de paso entre el Sur y el Norte y acceso a dos océanos-, y en las ventajas naturales de una geografía montañosa y selvática. Otros autores han hecho énfasis en factores políticos y sociales como la escasa presencia del Estado en los apartados territorios nacionales, la existencia de grupos armados que protegen la actividad de la persecución del Estado, y la existencia de una cultura de ilegalidad y de permisividad -tradición del contrabando y de la corrupción-. Posiblemente todos tienen razón, pues los argumentos no son excluyentes.

Inicialmente las drogas ilegales fueron un negocio de empresarios arriesgados, usualmente vinculados al lumpen y, por tanto, acostumbrados a manejar el riesgo propio de la actividad. De esa manera surgieron los hermanos Rodríguez, Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Ledher y un sin fin de empresarios delincuentes que, por ser empresarios aislados, y a pesar de manejar pequeños grupos fuertemente armados, terminaron por ser golpeados, encarcelados, muertos o extraditados

por el Estado. Los “carteles” de Cali y de Medellín fueron así aniquilados. En consecuencia, poco a poco se fueron quedando con el negocio los grupos armados ilegales que, precisamente por ser armados, pudieron manejar más adecuadamente los riesgos de la persecución estatal. La era de los “carteles” llegó a su fin y se impusieron los ejércitos ilegales al frente de la actividad narcotraficante.

Y en esta nueva era las más favorecidas fueron las FARC, pues ya contaban de antaño con un pequeño pero eficiente ejército de orden nacional, controlaban grandes zonas productoras y pasaron rápidamente del “gramaje” (“impuesto” a las ventas) a la producción y comercialización nacional e internacional. Súbitamente se encontraron entonces con ingentes recursos con los cuales ampliaron su capacidad de control territorial, objetivo primordial de la guerrilla en su política de conquista del poder. Y además no sólo se quedaron en el narcotráfico, también aumentaron sustancialmente sus actividades de extorsión de empresas y de secuestro de particulares.

Vino entonces la reacción. Aparece en los ochenta el MAS (“Muerte a Secuestradores”) de los narcotraficantes, y simultáneamente se consolidan las CONVIVIR de los empresarios rurales. Los últimos recibieron el apoyo del Estado y del ejército nacional bajo la creencia de que estos pequeños ejércitos privados podían ser controlados por sus patrones. ¡Gran error! Estos demiurgos pronto se revelaron incapaces de controlar el monstruo que habían creado. Los ejércitos paramilitares se fortalecieron con la misma táctica de la guerrilla y adoptaron su propia agenda de control territorial.

Como los jefes paramilitares no estaban circunscritos por una política de lucha contra el Estado, como si lo está la guerrilla, muy pronto convirtieron el enriquecimiento personal en objetivo del movimiento. Y no tuvieron ningún reparo en masacrar de forma sistemática para el logro de sus objetivos. Para ser justos, también hay que decir que las FARC se fueron desvirtuando como movimiento político hasta que la razón práctica se impuso. Dejaron de actuar como adalides de las reivindicaciones campesinas y se convirtieron en un ejército de ocupación territorial que defiende sus rentas. De hecho, tampoco han tenido miramientos en arrasar poblaciones rurales si el

objetivo del control territorial lo impone. El discurso político sólo les sirve hoy para las apariencias y el adoctrinamiento de sus militantes. En la práctica el narcotráfico ha terminado por ser su principal objetivo para ampliar el poder del movimiento. Como dijo Bacon, quien no vive como piensa, termina pensando como vive.

Así fue que dos ejércitos, el de la izquierda desvirtuada y entregado al ejercicio del control territorial, y el de la derecha, vinculado a la protección de terratenientes y empresarios rurales pero con aspiraciones propias de enriquecimiento personal, llegaron a dominar el negocio del narcotráfico. Por tanto, el problema del narcotráfico es más grave hoy que cuando lo manejaba Pablo Escobar, a pesar de la espectacularidad de sus acciones terroristas sanguinarias. De hecho, esa espectacularidad era directamente proporcional a su debilidad organizacional.

Cabe aclarar que lo anterior no implica que hayan desaparecido los empresarios privados del narcotráfico, pero sí es cierto que se han dispersado, casi pulverizado, en actividades narcotraficantes pequeñas y de delincuencia común que se articulan de forma subsidiaria a la actividad controlada por la guerrilla y los paramilitares -compra y venta de secuestrados, distribución local e internacional de los cargamentos, compra de armas y precursores químicos, etc.-. El hoy llamado Cartel del Norte del Valle, para poner un ejemplo, no es más que un puñado disperso de narcos que no se compara ni de lejos con las organizaciones que desafiaron al Estado en los ochenta y los noventa.

Pero ahí están los narquitos. Dispersos pero gananciosos. Y están en todo el país, desde la Costa Atlántica hasta Nariño. Y también están los ingresos de las FARC y de los paramilitares. Los ingresos de los últimos se encuentran hoy cuasi-legalizados y/o camuflados en actividades legales. No es extraño que el gasto en bienes de lujo se incremente vertiginosamente. Y la actividad económica está boyante: en conjunción con el gran incremento del gasto público que ha generado el gobierno dadivoso de los consejos comunitarios, los enormes flujos de ingreso del narcotráfico han estimulado la demanda